

**Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala de lo Social, Sección 1ª).****Sentencia núm. 1215/2007 de 29 octubre****AS\2008\673**

CONTRATO DE TRABAJO: actividad de alterne y prostitución: ausencia de dependencia y ajeneidad: no sujeción a jornada, ni horario y fuera del poder de organización y dirección del titular del local.

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 922/2007

Ponente: Ilmo. Sr. D. Faustino Cavas Martínez

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la actora contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de los de Murcia, de fecha 12-04-2007, en proceso seguido sobre sanción.

En MURCIA, a veintinueve de octubre del dos mil siete.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia formada por el Ilmo. Sr. Presidente D. JOSE LUIS ALONSO SAURA, y los Ilmos. Sres. Magistrados, D. RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ y D. FAUSTINO CAVAS MARTINEZ, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente:

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por INSPECCION TERRITORIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MURCIA, contra la sentencia número 137/07 del Juzgado de lo Social número Seis de Murcia, de fecha 12 de abril del 2007, dictada en proceso número 764/06, sobre SANCION, y entablado por INSPECCION TERRITORIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MURCIA frente a DOÑA Amparo, siendo los trabajadores afectados D. Rodolfo, Dª Constanza, Dª Isabel, Dª Mercedes, Dª Sara, Dª María Dolores, Dª Antonia, Dª Dolores, Dª Guadalupe, Dª Marta, Dª Susana, Dª María Virtudes y Dª Carla.

Actúa como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FAUSTINO CAVAS MARTINEZ, quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO**PRIMERO**

La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y en el que consta sentencia, en la que figura declarados los siguientes hechos probados: "Primero.- En fecha 06-10-06, tuvo entrada en este Juzgado de lo Social escrito de demanda-comunicación de oficio suscrita por la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MURCIA, en solicitud de que se declare la naturaleza laboral para el vínculo que une a Dª Amparo con las siguientes personas: D. Rodolfo, Dª Constanza, Dª Isabel, Dª Mercedes, Dª Sara, Dª María Dolores, Dª Antonia, Dª Dolores, Dª Guadalupe, Dª Marta, Dª Susana, Dª María Virtudes y Dª Carla. Segundo.- Dª Isabel, Dª Mercedes, Dª Sara, Dª María Dolores, Dª Antonia, Dª Dolores, Dª Guadalupe, Dª Marta, Dª Susana, Dª María Virtudes y Dª Carla, desde fecha que no consta, han venido ejerciendo la prostitución en un chalet sito en la finca 69 del Km. 7'5 de la Ctra. de Mazarrón, en Sangonera La Verde (Murcia), el cual había sido arrendado por la codemandada Dª Amparo, a quien entregaban el 50 % de las ganancias obtenidas con servicios sexuales a clientes y consumiciones efectuadas por los mismos. Dicha actividad la han venido desarrollando de forma voluntaria y sin sujeción a horario alguno ni a órdenes o instrucciones de trabajo. Tercero.- D. Rodolfo ha venido desempeñando funciones de portero en el chalet donde las personas antes relacionadas ejercían la prostitución; sin que tampoco conste sujeción a horario ni a instrucciones de trabajo. Cuarto.- Dª Constanza ha venido desempeñando funciones de limpiadora y de sustituta de la

Sra. Amparo en el chalet donde las personas antes relacionadas ejercían la prostitución; sin que tampoco conste sujeción a horario ni a instrucciones de trabajo."; y el fallo fue del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por Dª Amparo, frente a la demanda planteada en su contra por la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MURCIA. Que desestimando asimismo la demanda planteada por la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MURCIA, frente a Dª Amparo, D. Rodolfo, Dª Constanza, Dª Isabel, Dª Mercedes, Dª Sara, Dª María Dolores, Dª Antonia, Dª Dolores, Dª Guadalupe, Dª Marta, Dª Susana, Dª María Virtudes y Dª Carla, debo absolver y absuelvo a todos los codemandados de los pedimentos deducidos en su contra."

SEGUNDO

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el Sr. Abogado del Estado, en representación de la parte demandante, sin impugnación de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de Murcia, fechada en 12-04-2007, que previa desestimación de la excepción de incompetencia de jurisdicción planteada por la parte demandada desestimó la demanda-comunicación de oficio sobre declaración de existencia de relación laboral de "alterne" presentada por la Inspección Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia contra Dña. Amparo y otros, interpone el presente recurso de suplicación la Inspección de Trabajo al amparo del motivo previsto en el apartado c) del artículo 191 de la [Ley de Procedimiento Laboral \(RCL 1995, 1144, 1563\)](#).

La Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social insiste en calificar como laboral la actividad de las mujeres que prestan unos servicios que no son de índole exclusivamente sexual sino también de servicio de bebidas alcohólicas a los clientes, actividad que habrían realizado por cuenta de la codemandada, Sra. Amparo, en un chalet propiedad de ésta, con sujeción a horario fijado por la empresa y a cambio de una retribución, sin aportación de medio alguno por los trabajadores, y aun cuando el servicio se prestara en horario continuado de 24 horas pues, se afirma en el recurso, "tal horario era decisión de la empresa y no del trabajador". En cuanto a la remuneración, sostiene la representación letrada del Estado que "las trabajadoras cobraban una parte de su retribución, una cantidad fija derivada del trabajo que realizaban, que ascendía al 50% de la recaudación, tanto por servicios sexuales, como por bebidas o consumiciones alcohólicas. Derivándose un lucro tanto para la empresa, como una retribución para la trabajadora. Además las trabajadoras percibían otra parte de su retribución en especie consistente en casa-habitación".

SEGUNDO

Sobre la naturaleza jurídica de la prestación de servicios sexuales para terceros existe una ya consolidada jurisprudencia que distingue entre la actividad de "alterne" que se realiza en el ámbito de una relación laboral, es decir, por cuenta ajena, en el ámbito de organización y dirección de una empresa, con sometimiento a jornada y horario (por flexibles que éstos sean) y a cambio de una retribución, y la actividad de prostitución que se ejerce por cuenta propia ([Sentencias del TS de 3 de marzo de 1981 \[RJ 1981, 1301\]](#) , [25 de febrero de 1984 \[RJ 1984, 923\]](#) , [14 de mayo de 1985 \[RJ 1985, 2695\]](#) o 4 de febrero de 1988). El Tribunal Supremo en Sentencias de 21 de julio de 1995 y 11 de diciembre de 2001 , esta última inadmitiendo un recurso de casación de unificación de doctrina, distingue entre la actividad de alterne por cuenta propia y por cuenta ajena, afirmando el carácter laboral de esta última siempre que se acredite la ajenidad de la prestación de la actividad y la dependencia de dicha actividad en el seno de una organización empresarial. La razón fundamental estriba en que la actividad de alterne genera unos rendimientos económicos, previa la organización de capital y trabajo, que deben estar sometidos a las condiciones tributarias y laborales que protegen a los trabajadores, y disciplinan los presupuestos mercantiles de toda actividad económica.

Como tiene declarado la [STSJ de Navarra de 28 de mayo de 2004 \(AS 2004, 2096\)](#) , "El contrato de trabajo existe cuando la prestación de servicios se realiza en forma voluntaria y remunerada por cuenta de otro y en el ámbito de su organización y dirección (art. 1.1 del [Estatuto de los Trabajadores \(RCL 1995, 997\)](#) , presumiéndose el contrato de trabajo siempre que se preste el trabajo por cuenta ajena en el ámbito de organización y dirección de otro (art. 8.1 del Estatuto de los Trabajadores). Si se dan estas condiciones la actividad de alterne ha de considerarse laboral, tal y como ha resuelto la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en numerosas [Sentencias: de 4 de febrero de 1988 \(RJ 1988, 5948\)](#) , [21 de octubre de 1987 \(RJ 1987, 7172\)](#) , [13 de marzo de 1997 \(RJ 1997, 2461\)](#) , [15 junio \(RJ 1998, 5262\)](#) y

[20 de octubre de 1998 \(RJ 1998, 9296\)](#) . Conviene reseñar que en todas ellas la organización empresarial consistía en que la actividad de alterne se hacía por cuenta de los titulares de un establecimiento abierto al público, y a cambio de una retribución por comisión y participación en el importe de las consumiciones o servicios a los clientes.

El requisito de «dependencia», debatido en numerosas Sentencias de Tribunales Superiores, junto con el de flexibilidad horaria y de asistencia, ha venido flexibilizándose en el sentido de que no ha de entenderse por tal una «subordinación rigurosa y absoluta», sino una «inclusión en el círculo rector y disciplinario empresarial», que debe presumirse por la permanencia estable de la empleada en un local de alterne; por tanto, como expresamente señalan las [Sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 7 de abril de 1998 \(AS 1998, 2024\)](#) y [13 de noviembre de 2001 \(AS 2002, 1237\)](#) , [Balears de 28 de mayo de 1998; Andalucía/Málaga de 14 de julio de 2000 \(AS 2000, 5724\)](#) y 5 de octubre de 2001; [Cataluña, de 11 de abril de 2002 \(AS 2002, 1787\)](#) y [17 de septiembre de 2003 \(AS 2003, 3211\)](#) ; [Andalucía/Sevilla de 4 de diciembre de 2003 \(AS 2003, 3638\)](#) , en supuestos similares al de los presentes autos, el hecho que las empleadas pudieran gozar de cierta libertad para realizar sus iniciativas de captación de clientela, y cierta libertad de horario de permanencia en los locales de alterne, y que pudiera no acreditarse taxativamente su modo de retribución, no desvirtúa la relación laboral dado que la mayor o menor flexibilidad en el ejercicio de la facultad de dirección del empleador depende de la propia naturaleza de las tareas encomendadas al trabajador, y en el caso de las referidas empleadas, su modo de trabajo por comisión predica el reconocimiento de una cierta autonomía de horario, jornada y retribución en la prestación de su actividad.

SEXTO. En el voto particular formulado por los Ilmos. Sres. Don Jose Francisco, Don Luis María y Don Juan Alberto en el [recurso 2026/03 \(AS 2003, 3638\)](#) que dio lugar a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla de 4 de diciembre de 2003, se afirma en un caso análogo al de estos autos, que no se puede reconocer relación laboral a la actividad de prostitución pues «en tal relación existe un objeto ilícito, lo que determinaría la ineficacia o nulidad del contrato. Tal ilicitud deriva del grave riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de las trabajadoras afectadas, en concreto, de sus derechos a la libertad sexual y a la dignidad personal, riesgo que puede hacerse efectivo si al recurrente, dueño del local se le reconocen las facultades y derechos derivados de la condición de empleador y, con ello, los poderes directivos y organizativos, pues supondría la posibilidad de exigir a las interesadas el cumplimiento de las tareas contratadas, aun en contra de su libertad de actuación, además de favorecer, promover e inducir con ello al ejercicio de la prostitución, se trata de que calquemos con cánones éticos la actividad, así no decimos que sea inmoral o contraria a las buenas costumbres, sino de ilicitud, por contraria a la Ley, de la actividad empresarial que facilita el ejercicio de la prostitución con evidente peligro de que ésta sea forzada y no libre».

Frente a este argumento debe afirmarse que en el presente caso no se afirma por el acta de la inspección la actividad de prostitución de las demandadas, sino simplemente la de alterne, que no se puede calificar por sí misma de ilícita; y además es evidente que por el carácter personalísimo y libre de los servicios que se prestan nunca podrán ser exigibles en sí mismos con carácter vinculante o forzoso, debiendo primar la protección social y laboral de las empleadas, cuando consta que realizan una actividad por cuenta ajena en un establecimiento dedicado habitualmente a las actividades de alterne, actividad retribuida por comisión, en beneficio de un empresario que se lucra organizando dicha actividad en un local habilitado al efecto, y que debe asumir en las cargas sociales y laborales de dicha actividad".

Por su parte, el [TSJ de Galicia \(AS 2004, 1276\)](#) ha declarado en una Sentencia de que "La prostitución es una violación continua y reiterada de la dignidad de la mujer; es un ataque frontal contra su arcano más íntimo, esto es, su capacidad de decidir en plena libertad sobre su indemnidad e intimidad sexual. Desde otra perspectiva, la prostitución igualmente es una manifestación y proyección concreta de la violencia de género, porque estrangula desde el comienzo la posibilidad de desarrollar con dignidad la personalidad de la mujer (cfr. artículo 10 de la [Constitución Española \[RCL 1978, 2836\]](#)). Con estos dos axiomas ya podemos inferir que el ejercicio de la prostitución no puede ser objeto lícito de un contrato de trabajo, porque su objeto, el fin explotado para el beneficio patronal, es la negación de la libertad sexual como expresión de destrucción de la capacidad de decidir por sí misma una persona cuándo, con quién y de qué forma permite y quiere donarse con y en otra para lograr enriquecer su propia personalidad. No olvidemos que los actos voluntarios y queridos van fortaleciendo y forjando la dignidad y la libertad de una persona; los obligados y subyugados, la van destruyendo en cada acto". En esta sentencia también se afirma que "Es cierto que existe una cierta doctrina jurisprudencial que admite la relación laboral entre las chicas de alterne y su empresario (cfr. [Sentencias del Tribunal Supremo de 4-2-88 \[RJ 1988, 571\]](#)), recordando la jurisprudencia contenida en las anteriores sentencias del mismo Tribunal de 14-5-78 , [3-3-81 \(RJ 1981, 1301\)](#) y [25-2-1984 \(RJ 1984, 923\)](#) ; añadiendo en este sentido la [Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de diciembre de 2003 \(AS 2003, 3692\)](#) que «nuestra jurisprudencia ha incluido en la relación laboral en el supuesto de concurrir la ajeneidad y la dependencia organizativa a la

prestación de servicios de "alterne" que aunque no identificable con la de prostitución, supone precisamente el límite prestacional con ésta; un límite fisiológico pues el favor sexual no puede ser objeto de subordinación empresarial y un límite jurídico entre el trabajador por cuenta ajena -relación de alterne- y el trabajador por cuenta propia -relación de prostitución-; pero también lo es que se admite cuando se queda exclusivamente en la actividad consistente «en la permanencia en un local en horas fijas cada día, para la captación de clientes varones, mediante su atractivo, cobrando un porcentaje de las consumiciones por ella conseguidas», algo que no concurre en este caso, ya que la actividad excede de la consecución de consumiciones. Y es cierto igualmente, que un estado social y democrático de derecho como el nuestro debe reaccionar inmediatamente frente a estas situaciones, pero no desde la facilidad de dejar que sea la jurisprudencia la que declare la existencia de una relación laboral cuando el objeto es ilícito y por tanto el contrato nulo; la reacción debe iniciarse desde políticas sociales activas, educacionales y formativas, y de persecución penal de estas actividades, pero no imponiendo el barniz de una relación laboral ficticia, para así conseguir cobertura laboral y desde la Seguridad Social, cuando a ésta debe llegarse desde otros caminos, ofreciendo una adecuada protección prestacional a las inmigrantes que se encuentran en tal situación".

Recientemente, el Tribunal Supremo ha abordado en su [Sentencia de 27 de noviembre de 2004 \(RJ 2004, 8063\)](#) (caso "Mesalina") el tema relativo a si la actividad mercantil consistente en la tenencia de hoteles destinados a dispensar productos o servicios a terceras personas ajenas al establecimiento que ejerzan el alterne o la prostitución por cuenta propia puede o no constituir el objeto de una asociación empresarial. En dicha sentencia se afirma: "Como esta Sala declaró en su [sentencia de 25 de enero de 1999 \(RJ 1999, 1022\)](#) , para que exista una asociación de empresarios es necesario que intervengan en las relaciones laborales, contribuyendo como dice el art. 7 de la [Constitución \(RCL 1978, 2836\)](#) en paralelo con los Sindicatos a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios, siendo los medios típicos de la acción de las asociaciones empresariales la negociación colectiva laboral, el diálogo Social, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo y la participación institucional en los organismos públicos de las Administraciones laborales. En consecuencia si las empresas que integran la Asociación de autos, son titulares de los establecimientos hosteleros de referencia, que por su propia naturaleza necesitan para su funcionamiento de personal laboral, como son los camareros, limpiadoras, etc., y el "alterne", en su caso, cuando la actividad sea laboral, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, la conclusión, a la que se llega, como razona la sentencia recurrida, es que están legitimados para asociarse y para intervenir, en cuantos problemas se deriven de las relaciones laborales, antes relacionadas; suponer como alega el Abogado del Estado que realmente el objeto del establecimiento sea la explotación de la prostitución y que por tanto, el objeto social expresado en el art. 3 de los estatutos constituye un fraude no deja de ser una presunción no probada, aparte de que la Sala no puede presumir que la Asociación pretenda fomentar la prostitución y si, en el curso de su actividad futura, así fuera, será entonces cuando habrán de adoptarse las medidas oportunas por quien corresponda".

Aunque en el recurso se afirma que en el presente caso "la dependencia y ajenidad se desprenden de la existencia de retribución por trabajo realizado en instalaciones de la empresa con horario fijado por ésta (por amplio y flexible que sea), con aportación de medios ajenos a la propia empresa y propios de la trabajadora, usando las instalaciones de la empresa para poder recibir las remuneraciones, y por el horario de apertura y cierre del local que decide la empresa", lo anterior choca frontalmente con la convicción judicial reflejada en la relación de hechos probados de la sentencia de instancia, la cual no ha sido combatida por la representación letrada del Estado permitiendo con ello que la misma adquiera firmeza, y en la que claramente se afirma que las codemandadas "han venido ejerciendo la prostitución en un chalet sito en la finca 69 del km. 7'5 de la Ctra. De Mazarrón, en Sangonera La Verde (Murcia), el cual había sido arrendado por la codemandada Dª Amparo, a quien entregaban el 50% de las ganancias obtenidas con servicios sexuales a clientes y consumiciones efectuadas por los mismos. Dicha actividad la han venido desarrollando de forma voluntaria y sin sujeción a horario alguno ni a órdenes o instrucciones de trabajo" (ordinal fáctico segundo). Y en cuanto a la actividades de portería que venía realizando el codemandado Sr. Rodolfo, y las de limpieza y sustitución de la Sra. Amparo que realizaba la codemandada Sra. Constanza en el chalet donde las personas relacionadas en el hecho probado segundo ejercían la prostitución, se sostiene igualmente en la sentencia que no consta sujeción a horario ni a instrucciones de trabajo en su desempeño (ordinales fácticos tercero y cuarto).

A partir de esta descripción de la actividad que venían realizando los codemandados, con valor de hecho probado no desvirtuado de contrario, se sigue inevitablemente la consecuencia obtenida por el juzgador a quo en el fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida, donde afirma que "la relación jurídica existente entre la codemandada Sra. Amparo y el resto de codemandados no reúne las características propias de una relación laboral, pues no existe dependencia, ni ajenidad, ni jornada ni horario de trabajo, ni retribución; por lo que la demanda debe ser desestimada", al no reunir los servicios prestados las notas caracterizadoras de una relación laboral que se exigen en el artículo 1.1 del [Estatuto](#).

[de los Trabajadores \(RCL 1995, 997\)](#) . A este respecto, interesa recordar que la presunción de certeza de la que gozan las actas de infracción extendidas por la Inspección de Trabajo no es una presunción iuris et de iure, sino que admite prueba en contrario, que es lo que ha acontecido en el presente caso, donde el juez ha llegado a conclusión distinta a partir de la prueba documental obrante en autos, y en especial, como afirma en el fundamento jurídico primero, de las declaraciones efectuadas y firmadas por los codemandados ante la Jefatura Superior de policía de Murcia.

Asimismo, esta Sala desea poner de manifiesto las diferencias existentes entre el supuesto aquí enjuiciado y en el que fue examinado en nuestra Sentencia núm. 296/2004, de 19 de abril , para justificar la distinta solución alcanzada en uno y otro supuestos. Y es que, mientras en el caso decidido en aquella ocasión los trabajadores realizaban labores de alterne, con sujeción a un horario y en los locales de la propia empresa, incentivando a los clientes al consumo de bebidas en el propio local, recibiendo una retribución a comisión por cada copa consumida por el cliente sobre el precio total de cada copa que venía establecido y decidido por la propia empresa, en el presente litigio la actividad principal a la que se dedicaban las codemandadas era la prostitución, no siendo posible deslindar de esta actividad la complementaria de incitación al consumo de bebidas por parte de la clientela, todo ello sin sujeción a jornada ni horario y fuera del poder de organización y dirección de la titular del chalet, por lo que resulta imposible identificar las notas de ajenidad y dependencia que caracterizan una relación jurídico-laboral.

Se impone, pues, la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia. Sin que proceda condenar en costas a la Administración recurrente, al no haber existido impugnación de contrario.

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere la Constitución, ha decidido:

Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por INSPECCION TERRITORIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MURCIA, contra la sentencia número 137/07 del Juzgado de lo Social número Seis de Murcia, de fecha 12 de abril del 2007, dictada en proceso número 764/06, sobre SANCION, y entablado por INSPECCION TERRITORIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MURCIA frente a DOÑA Amparo, siendo los trabajadores afectados D. Rodolfo, D^a Constanza, D^a Isabel, D^a Mercedes, D^a Sara, D^a María Dolores, D^a Antonia, D^a Dolores, D^a Guadalupe, D^a Marta, D^a Susana, D^a María Virtudes y D^a Carla, y confirmar, como confirmamos, el pronunciamiento de instancia.

Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO, cuenta número: 3104.0000.66.092207, a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiese en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300'51 euros en la entidad de crédito BANESTO c/c 2410-4043-00-0922-07 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigase en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el

oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr./a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.